

¿Polis ilusoria, democracia irrelevante?
por MANUEL ANTONIO GARRETÓN sociólogo, profesor de la Universidad de Chile

El problema central de nuestras sociedades ya no es construir un sistema democrático a partir de la situación de guerra civil, autoritarismo o régimen militar como en los años ochenta, sino recomponer la base social en que la democracia tenga sentido y relevancia. De lo que se trata es de reconstruir nuestras polis, es decir, países que sean comunidades histórico-morales, socioeconómicas y políticas.

La erosión de la sociedad política

La teoría democrática, o la idea de democracia, tuvo siempre como supuesto la existencia de una sociedad, es decir, de un territorio con una población, en que economía, estructura social, cultura y política se correspondían o eran coextensivos en ese espacio y, además, existía un centro de decisiones. Más precisamente, se trataba de una polis, dado que el poder en torno a la marcha general de esta sociedad residía en el Estado, objeto de lucha y cooperación que representaba a los habitantes convertidos en ciudadanos. No hay democracia, ni ningún tipo de régimen político, allí donde no hay polis.

Así, el debilitamiento de la polis es el problema central de las democracias actuales, una vez que se han superado las formas autoritarias o los regímenes no democráticos a través de las transiciones o democratizaciones, en otras palabras, una vez que ellas existen como el único régimen político legítimo. Esto significa que no hay un espacio de correspondencia entre economía, cultura y política y que, por lo tanto, no existe un centro de decisiones o, más simplemente, que el poder está fuera de la sociedad o dentro, pero no controlado por ella. Por ejemplo, si la Bolsa de Tokio decide lo que pasa con el empleo en un país o un grupo de inversores extranjeros determina a través del riesgo-país qué candidato hay que elegir, no estamos en presencia de una polis en el sentido clásico: el espacio donde los habitantes toman las decisiones que los afectan.

Este estallido de la polis la torna ilusoria y deja sin base de sustentación a la democracia o a cualquier régimen político. Y ello se produce en la época actual debido al predominio irrestricto en la vida social, y al desborde territorial, de aquello que precisamente muchos consideraron una condición sine qua non de la democracia: la existencia de un espacio económico no controlado por el Estado y la política, el mercado. Para decirlo con toda claridad: la existencia de mercados globalizados independientes de los Estados, es decir, la independización del espacio económico de su base territorial y del control y regulación del Estado es incompatible con la idea o teoría democrática. En teoría, la economía de mercado globalizada y la democracia son incompatibles. En términos prácticos y en la realidad de la mayoría de los países dependientes en este mercado globalizado, esta incompatibilidad entre los dos sistemas permite una coexistencia de ambos en cuyo marco la democracia puede volverse irrelevante.

América Latina, ¿democracia sin sociedad?

Ese desajuste entre democracia y economía de mercado explica la paradoja de América Latina: nunca antes habíamos tenido regímenes democráticos prácticamente en todos los países y ello en el exacto período en que se impone el modelo económico de mercados

transnacionales o, en términos más precisos, de poderes económicos que atraviesan los espacios nacionales y reorganizan las economías a partir de su inserción, siempre fragmentaria, en la economía mundial.

En efecto, al desaparecer la sociedad-polis, el espacio donde los ciudadanos toman las decisiones centrales a través de sus sistemas de representación, el régimen político se debilita y, por lo tanto, puede coexistir con los poderes fácticos nacionales o transnacionales que de hecho deciden. Es cierto que estamos hablando en términos absolutos de un fenómeno relativo, porque ni han desaparecido totalmente la polis y el Estado ni, en consecuencia, la democracia es enteramente irrelevante. Además, porque para lo que queda de las decisiones que no toman los poderes fácticos y para morigerar su arbitrariedad y permitir un mínimo espacio de libertades, soberanía popular y expresión ciudadana, no hay otro régimen que el democrático. No obstante, la legitimidad de la que goza este régimen en nuestras sociedades en los últimos tiempos no guarda relación con su incapacidad para abordar y resolver los problemas que le corresponde resolver, y ello no es culpa de la democracia sino del tipo de sociedad que se ha ido constituyendo bajo esta modalidad de desarrollo.

La reconstrucción de la sociedad política

De lo expuesto se desprende que la tarea fundamental de nuestras sociedades ya no es construir un régimen democrático a partir de la situación de guerra civil, autoritarismo o régimen militar como en los años ochenta, sino recomponer la base social en que la democracia tenga sentido y relevancia. Se trata de reconstruir nuestras polis, nuestras comunidades políticas.

Y esta reconstrucción, específica según la realidad de cada país de la región, tiene al menos tres dimensiones. En primer lugar, resulta necesario reconstruir un país (que es otra manera de nombrar la sociedad-polis) como comunidad histórico-moral. Las sociedades latinoamericanas han sufrido, a lo largo de su historia, quiebres y desgarramientos que no han sido asumidos ni superados de modo de poder proyectarse como un conjunto moral hacia el futuro. Ese momento de división y desgarro, común a casi todos los países de la región, hace que los diversos sectores involucrados o sus herederos simplemente coexistan en un mismo espacio pero no se sientan parte de una misma comunidad histórico-moral. A veces, este proceso tomó la forma de guerra civil larvada o abierta, otras la de grandes crímenes masivos contra la humanidad perpetrados por dictaduras militares, otras el avasallamiento de las poblaciones indígenas. Es decir, en cada sociedad hay un estigma en virtud del cual unos niegan a otros, y que no se ha podido resolver todavía en los términos de una verdadera reconciliación (aun cuando no sepamos con certeza en qué consistiría esa reconciliación), por lo que algunos se quedan encerrados en ese pasado y otros, por el contrario, lo desconocen. En cualquier caso, la historia y proyección común desaparecen. A ello hay que agregar que en otras épocas las visiones históricas e ideológicas antagónicas sobre el país compartían, sin embargo, la idea de proyecto de país, aunque se disputara sobre el sentido, contenido o dirección de ese proyecto. Hoy es la noción misma de proyecto de país la que está en cuestión, desaparece la voluntad de un destino común.

En segundo lugar, es necesario reconstruir una comunidad socioeconómica, lo que exige, por un lado, la superación de las exclusiones que hoy se presentan no sólo como explotación o dominación sino como simple y masiva expulsión de vastos sectores. La pertenencia a la polis, que se traduce en un piso estable de nivel de vida y derechos

mínimos, queda reducida a veces a la mitad de la población debido a esa situación. Por otro lado, hay una cuestión que va más allá de la superación de la pobreza y la exclusión, y que atañe a la igualdad socioeconómica, puesto que si las primeras afectan la vida de la gente, las desigualdades o diferencias extremas de riqueza y poder dificultan la existencia de un país como tal y lo convierten en varios países dentro de un mismo espacio, sin intereses y aspiraciones comunes. Finalmente, no hay comunidad económica si no existe la capacidad de la acción colectiva de controlar y regular la economía y si los núcleos decisorios de ella residen fuera del país, escapan a sus controles y regulaciones o los hacen imposibles.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, es importante reconstruir la comunidad política, es decir, hacer que el Estado asuma su papel de garante de la unidad y cohesión sociales y de dirigente del desarrollo por encima de los poderes fácticos y de los mercados transnacionalizados, y que la política sea efectivamente el campo donde se deciden los grandes asuntos de la sociedad. Si la reconciliación ético-histórica y el cambio del modelo de desarrollo son expresión de las dos primeras dimensiones de la reconstrucción de la sociedad, base de cualquier régimen, la reforma política es la principal expresión de la tercera. Y cuando hablamos de reforma política suponemos que ella abarca todos los componentes de lo que llamamos política: el Estado, para asegurar el principio de estaticidad o capacidad de orientar el desarrollo y ser referente de la acción colectiva; el régimen democrático, para mejorar su calidad y hacerlo relevante; los actores políticos, para consolidar la representatividad; y la sociedad civil o ciudadanía, para garantizar la participación.

Crisis estructural y crisis coyuntural

Esta desestructuración de las sociedades como base de la polis y, por lo tanto, de la democracia define una crisis estructural en los países latinoamericanos, de la que se puede empezar a salir sólo mediante un proceso de reconstrucción de la sociedad política en las tres dimensiones que hemos indicado. Pero es preciso reconocer que en la medida en que existe un aspecto estructural que concierne a la realidad del mundo globalizado, y que no puede manejarse sólo en el plano de los Estados nacionales, de lo que se trata es de una ampliación de la polis, más allá de la comunidad nacional-estatal, en una doble dirección. Hacia "abajo", en términos del fortalecimiento del espacio local, llámese municipio o región. Y hacia "arriba", en términos del espacio supraestatal-nacional, lo que en nuestro caso significa la construcción y fortalecimiento de la comunidad política latinoamericana, tal como lo han comprendido los europeos que consolidaron a la vez sus propios Estados nacionales y la Unión Europea. Y esta construcción de la polis latinoamericana –de algún modo en ciernes– a través de instancias como la cláusula democrática del Mercosur, por citar sólo un ejemplo, es una tarea de hoy y no de mañana. En este sentido, ella se irá haciendo a través de tres ejes, el mexicano-centroamericano, el andino y el brasileño-Mercosur. En lo que atañe específicamente al último eje, la asociación e integración chileno-argentina aparece como una condición sine qua non para su realización, condición a su vez de una polis más amplia en el ámbito latinoamericano.

Ahora bien, los diversos países se han visto afectados de diferente manera por este gran cambio desestructurador de las relaciones entre economía, cultura y sociedad. De modo que más allá de la crisis estructural, algunos enfrentan una crisis coyuntural de enorme magnitud que los amenaza con su disolución como país. Pero esta situación, más generalizada de lo que parece a simple vista, afecta también al conjunto de la región en

la medida en que retarda el proceso de construcción de la comunidad política o polis latinoamericana.

Existen tres grandes modelos de salida de esta crisis coyuntural, una vez superadas la simple constatación y contemplación autocompasiva que espera una solución surgida mágicamente del hecho de “tocar fondo”. El primero es la ilusión “toccquevilliana”, que centra todas sus esperanzas en la sociedad civil y la recomposición del tejido social a través de nuevas formas de asociatividad y organización y que rechaza la política. El segundo es la ilusión “cesarista”, que centra toda la esperanza en un líder o en la política tecnocrática cupular, ambos de tendencia autoritaria, y que desconfía absolutamente de la sociedad. Estos dos modelos han sido probados en diversos grados en la actual situación por algunos países. La tercera salida consiste en emprender el camino en los términos aquí analizados: aprovechar la crisis como una oportunidad de refundar la polis, contando para ello con la legitimidad de las instituciones democráticas que, quizás por milagro, permanecen sólidas.

Cabe preguntarse, para no caer en una nueva ilusión, si existe en nuestras sociedades la reserva de actores sociales y políticos capaces de emprender este camino. •